



CORRIENTE

MARXISTA

INTERNACIONAL

Perú en llamas



¿Revolución o contrarrevolución?



: CMI Perú

cmi.peru2021@gmail.com

Perú: la victoria de Castillo un terremoto político

Jorge Martín

La victoria de Pedro Castillo en las elecciones presidenciales peruanas es un gran terremoto político, que refleja la enorme polarización social y política en el país andino. La clase dominante ha sufrido una derrota masiva por parte de las masas, de la mano del sindicalista magisterial combativo a la cabeza de un partido, Perú Libre, que se describe como marxista, leninista y mariateguista.

El recuento fue un proceso lento y doloroso, y el resultado decisivo no fue claro hasta el final, tres días después del cierre de las urnas el 6 de junio. En el momento de redactar este artículo, con el 99,795 por ciento de los votos contados, Pedro Castillo tiene 8,735,448 votos (50.206 por ciento), lo que le da una pequeña pero irreversible ventaja sobre su rival, la populista de derecha Keiko Fujimori, quien obtuvo 8,663,684 votos (49.794 por ciento).

Incluso ahora, los resultados oficiales no se han proclamado. El equipo de Fujimori alega fraude y está preparando decenas de apelaciones. Las masas están dispuestas a defender el voto en las calles. Hay reportes de que 20,000 ronderos (miembros de las milicias de autodefensa campesina creadas durante la guerra civil en la década de 1990, de las cuales Castillo es miembro) están viajando a la capital para defender la voluntad del pueblo. Hoy, 9 de junio, se ha convocado una manifestación masiva en Lima, donde la gente se ha reunido durante tres noches seguidas frente a la sede electoral de Castillo.

Fue la extrema fragmentación del voto en la primera vuelta lo que permitió a Castillo pasar a la segunda vuelta con apenas el 19 por ciento. Sin embargo, su éxito electoral no es casualidad. Es una expresión de la profunda crisis del régimen en Perú. Décadas de políticas de privatización y liberalización contra la clase trabajadora en un país extremadamente rico en recursos minerales han dejado un legado de democracia burguesa basada en la extrema disparidad de riqueza y la corrupción generalizada.

Cinco expresidentes están en la cárcel o acusados de corrupción. Todas las instituciones de la democracia burguesa están extremadamente desacreditadas. Las manifestaciones masivas de noviembre de 2020 fueron una expresión de la profunda ira acumulada en la sociedad peruana.

A esto hay que sumar el impacto de la pandemia de la COVID-19 y la crisis capitalista. El país sufrió una de las peores contracciones económicas en América Latina con un 11 por ciento de caída del PIB, y ha registrado el peor porcentaje de exceso de muertes y la peor tasa de mortalidad en todo el mundo, mientras que los ricos y políticos gubernamentales se vacunaron antes que nadie.

Un voto por un cambio radical

Las masas de obreros y campesinos querían un cambio radical y eso es precisamente lo que representa Pedro Castillo a sus ojos. Su campaña tuvo dos ejes políticos principales: la renegociación de los términos de los contratos con las multinacionales mineras (y si se niegan, serían nacionalizadas) y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para acabar con la constitución de 1993 redactada durante la dictadura de Fujimori (el padre de la candidata Keiko).

Sus principales consignas electorales: “no más pobres en un país rico” y “palabra de maestro” resonaron en los oprimidos, los trabajadores, los pobres, los campesinos, los indígenas quechuas y aymaras, particularmente en las zonas obreras y pobres alejadas de los círculos de clase alta de piel clara de Lima.

La autoridad de Castillo proviene de haber desafiado a la burocracia sindical para liderar la huelga de maestros de 2017. Para los obreros y campesinos, es uno de los suyos. Un humilde maestro rural de raíces campesinas que ha prometido vivir del salario de su maestro cuando asuma la presidencia. Su atractivo es precisamente el de ser un antisistema por la izquierda. Su popularidad revela un profundo descrédito de la democracia burguesa y de todos los partidos políticos (incluidos los principales partidos de la izquierda).

Aunque Keiko Fujimori no era su candidata favorita, toda la clase dominante peruana cerró filas detrás de ella en la segunda vuelta. Su campaña fue brutal. Las vallas publicitarias en Lima proclamaban “El comunismo es pobreza”, y se amenazaba con las siete plagas si Castillo ganaba las elecciones. Se le acusaba de ser “el candidato del violento Sendero Luminoso” en un terruqueo que no caló. El premio Nobel Vargas Llosa, quien en el pasado se opuso al gobierno de Alberto Fujimori desde un punto de vista liberal burgués, escribió furiosos artículos de opinión afirmando que una victoria para Castillo significaría el fin de la democracia.

A pesar de todo eso, o quizás precisamente por el odio que provocó entre la clase dominante, Castillo arrancó la campaña de la segunda vuelta con 20 puntos de ventaja sobre su rival. Esa ventaja se redujo a medida que se acercaba el día de las elecciones. En parte porque la campaña de odio empujó a los votantes va-



cilantes hacia Keiko Fujimori, pero también en parte porque Castillo intentó rebajar el tono de su mensaje y moderar sus promesas.

Si bien en la primera vuelta había prometido convocar una Asamblea Constituyente a toda costa, ahora dijo que respetaría la Constitución de 1993 y pediría al Congreso (donde no tiene mayoría) que llamara a un referéndum para decidir si convocar una Asamblea Constituyente. Si bien en la primera ronda dijo que nacionalizaría las minas, ahora enfatizó que primero intentará renegociar los contratos. Cuanto más hizo eso, más se redujo su ventaja, hasta un punto en el que el día de las elecciones su victoria fue muy ajustada.

Contradicciones de clase

Sin embargo, la estrecha victoria enmascara la aguda polarización de clases del país. Fujimori ha ganado en Lima (65 a 34) e incluso aquí sus mejores resultados están en los distritos más ricos: San Isidro (88 por ciento), Miraflores (84 por ciento) y Surco (82 por ciento). Castillo ha ganado en 17 de los 25 departamentos del país, con victorias masivas en las regiones andinas y del sur más pobres: Ayacucho 82 por ciento, Huancavelica 85 por ciento, Puno 89 por ciento, Cusco 83 por ciento. También ganó en su Cajamarca natal (71 por ciento), una región donde ha habido protestas masivas contra la minería.

En los últimos días de la campaña, Keiko Fujimori, en un estilo populista clásico, prometió transferencias directas de dinero de los pagos de las empresas mineras a la población de los pueblos donde se encuentran las minas. Este fue un intento de alejar a los votantes de la propuesta de Castillo de cambiar los contratos para beneficiar a todo el pueblo. Los votantes eligieron a Castillo masivamente en todos los pueblos mineros: en Chumbivilcas (Cusco), 96 por ciento, Cotabambas (Apurímac), la base de la mina china MMG Las Bambas, más del 91 por ciento, Espinar (Cusco), donde opera Glencore, más de 92 por ciento; Huari (Áncash) donde hay una mina conjunta BHP Billiton - Glencore, más del 80 por ciento.

Las masas de trabajadores y campesinos que apoyan a Castillo estaban dispuestas a salir a las calles a defender su victoria, mientras Fujimori gritaba fraude y apelaba los resultados. En los días previos a las elecciones e inmediatamente después ha habido rumores de golpe militar. Destacados partidarios de Fujimori pidieron al Ejército que intervenga para evitar que Castillo tome el poder.

No hay duda de que un sector de la clase dominante en Perú está en pánico y utilizó todos los medios a su alcance para evitar que Castillo ganara las elecciones. Lo ven como una amenaza a su poder y privilegios y la forma en que han gobernado el país desde su independencia hace 200 años.

Hasta ahora, parece que han prevalecido los elementos más cautelosos de la clase dominante. Un editorial del principal periódico burgués La República describió a Fujimori como un irresponsable por gritar fraude. "Apelemos al liderazgo sensato y meditado de líderes políticos y autoridades. Necesitamos tranquilizar las calles del interior del país, que bullen entre la desconfianza y el hartazgo". Eso es lo que les preocupa. Cualquier intento de robarle la elección a Castillo sacaría a las calles a las masas de trabajadores y campesinos, radicalizándolas aún más.



Todo esto da una idea de lo que enfrentará Castillo una vez que asuma el cargo. La clase dominante y el imperialismo recurrirán a todos los medios necesarios para evitar que gobierne realmente. Hemos visto el mismo guion en el pasado contra Chávez en Venezuela. Destacados miembros de la oposición venezolana golpista estaban en Lima para respaldar a Fujimori antes de las elecciones y eso no es casualidad. Utilizarán el Congreso y las otras instituciones burguesas, los medios de comunicación, el aparato estatal (hasta e incluido el ejército), el sabotaje económico, para limitar su capacidad de implementar sus políticas.

Defiende la victoria: prepárate para la batalla

El programa de Castillo, a pesar de las referencias a Marx, Lenin y Mariátegui en los documentos de Perú Libre, es de desarrollo nacional capitalista. Plantea utilizar la riqueza mineral del país para programas sociales (principalmente educación) y trabajar con los "empresarios nacionales productivos" para "desarrollar la economía". Sus modelos son Correa de Ecuador y Morales de Bolivia.

El problema es que esos responsables capitalistas "productivos nacionales" no existen. La clase dominante peruana, los banqueros, terratenientes, capitalistas, están estrechamente vinculados a los intereses de las multinacionales y del imperialismo. No les interesa ningún "desarrollo nacional", sino su propio enriquecimiento.

Castillo ahora se enfrentará a un dilema. Por un lado, puede gobernar a favor de las masas de trabajadores y campesinos que lo han elegido, lo que significaría una ruptura radical con los capitalistas y las multinacionales.



Eso solo se puede hacer apoyándose en la movilización de masas extraparlamentaria. O puede ceder, suavizar su programa y adaptarse a los intereses de la clase dominante, lo que significa que será desacreditado entre quienes han votado por él, preparando su propia caída. Si intenta servir a dos amos (los trabajadores y los capitalistas) al mismo tiempo, no complacerá a ninguno de los dos.

En un intento de tranquilizar a “los mercados”, que estaban nerviosos durante el conteo, el equipo de Castillo emitió un comunicado que vale la pena citar en profundidad: “En un eventual gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones, candidato presidencial de Perú Libre, respetaremos la autonomía del Banco Central de Reserva, que ha realizado una buena labor manteniendo la inflación baja durante más de dos décadas. Reiteramos que no hemos considerado en nuestro plan económico estatizaciones, expropiaciones, confiscaciones de ahorros, controles de cambios, controles de precios o prohibición de importaciones. La economía popular con mercados que preconizamos promueve el crecimiento de las empresas y negocios, en particular la agricultura y las pymes, con el fin de generar más empleos y mejores oportunidades económicas para todos los peruanos. Mantendremos un diálogo abierto y amplio con los diversos sectores de empresarios y emprendedores honestos, cuyo rol en la industrialización y desarrollo productivo es fundamental. Garantizar el derecho a la salud y la educación para todos requiere mejorar la calidad y aumentar el gasto social, lo que debe fundamentarse en reformas tributarias a la minería para elevar la recaudación en el marco de una política de sostenibilidad fiscal, con reducción paulatina del déficit público y respetando todos los compromisos de pago de la deuda pública peruana” (énfasis mío).

El propio Castillo declaró: “Acabo de tener conversaciones con el empresariado nacional, que está mostrando el respaldo al pueblo. Haremos un Gobierno respetuoso de la democracia, de la Constitución actual. Haremos un Gobierno con estabilidad financiera y económica”. Toda la experiencia muestra que lo que la clase dominante describe como “estabilidad financiera y económica”, en realidad significa hacer que los trabajadores y los pobres paguen por la crisis de su sistema garantizando las mejores condiciones posibles para la realización de las ganancias capitalistas. El pago de la deuda está en contradicción directa con la aplicación de una política de gasto social. A todo esto Castillo debería oponer los intereses generales de los trabajadores y campesinos. No hay camino intermedio.

Por ahora, las masas peruanas celebran y permanecen en guardia para defender su victoria. La lucha apenas ha comenzado. Cada paso adelante que dé Castillo debe ser apoyado. Sus vacilaciones o retrocesos deben ser criticados. Los obreros y campesinos sólo pueden confiar en sus propias fuerzas y estas deben movilizarse para asestar golpes contra la oligarquía.

Mariátegui, en la conclusión de su “Punto de vista antiimperialista”, tesis que presentó a la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana en 1929, dijo: “En conclusión, somos antimperialistas porque somos marxistas, porque somos revolucionarios, porque oponemos al capitalismo el socialismo como sistema antagónico, llamado a sucederlo, porque en la lucha contra los imperialismos extranjeros cumplimos nuestros deberes de solidaridad con las masas revolucionarias de Europa.” Su punto de vista es hoy más relevante que nunca.

Únete a la Corriente Marxista Internacional en Perú

*“La revolución latinoamericana será nada más y nada menos que una etapa, una fase de la revolución mundial. Será simple y puramente la revolución socialista. A esta palabra, agregad, según los casos, todos los adjetivos que queráis: ‘antiimperialista’, ‘agrarista’, ‘nacionalista revolucionaria’. El socialismo los supone, los antecede, los abarca a todos”.
¡Por la emancipación de todos los oprimidos del mundo, organización y lucha de clases!*



cmi.peru2021@gmail.com

José Carlos Mariátegui

 : **CMI Perú**



Las tareas de los marxistas ante el gobierno de Pedro Castillo

Karen Campos

Los acontecimientos que se están desarrollando en el Perú, requieren especial atención por parte de los revolucionarios. Los escándalos de corrupción, la severa crisis económica y la mala gestión estatal de la pandemia, han puesto al descubierto las grandes contradicciones del capitalismo peruano, pues las condiciones de vida son tan precarias y el saqueo imperialista tan evidente que la lucha de clases se siente a flor de piel.

Desde el estallido de noviembre de 2020 pudimos notar dos cuestiones importantes, la primera la bancarrota de las instituciones del estado peruano, miopes y corruptas hasta la médula, donde entre sus pugnas internas y luchas de poder entre bancadas parlamentarias, decidieron impulsar el proceso de vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra, lo que desencadenaría una serie de movilizaciones y protestas en Lima y otras regiones del Perú, que dieron muestra de nuestra segunda cuestión a analizar, el hartazgo y la disposición de lucha de los oprimidos peruanos. La presión del movimiento fue tal que en cuestión de días el presidente interino Manuel Merino tuvo que renunciar y Rafael Sagasti tomó su lugar, como maniobra parlamentaria para evitar que las movilizaciones siguieran escalando. Esta situación nos mostró con claridad las evidentes diferencias y divisiones que existen entre los representantes de la burguesía peruana, y la gran fuerza que puede tener el movimiento de masas trabajadoras del Perú, pues estas no salieron a las calles en defensa de un personaje corrupto, salieron a las calles a mostrar su descontento contra el conjunto de corrupción existente en el aparato estatal, contra la crisis económica, contra la falta de servicios sanitarios para enfrentar la pandemia, contra la precariedad y el hambre a la que los ha sometido el capitalismo y los burócratas que lo representan.

Finalmente, a falta de una dirección revolucionaria, el movimiento se disolvió entre las promesas y maniobras del estado burgués, sin embargo, la lucha buscaría un nuevo cauce de expresión en las elecciones presidenciales. En abril de 2021, se llevaron a cabo las elecciones, con un resultado inesperado, Pedro Castillo, un profesor y sindicalista rural, participando en el partido Perú Libre, que se asume de izquierda, marxista, leninista y mariateguis-

ta, resultó ganador y se perfiló junto con la representante de derechas Keiko Fujimori para la segunda ronda de elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 6 de junio.

La victoria de Castillo en la primera vuelta, para sorpresa de muchos, fue la expresión de la acumulación de malestar y rabia profunda de los sectores más oprimidos del pueblo trabajador del Perú. La consigna de "no más pobres en un país rico" conectó con la contradicción visible entre la enorme riqueza minera y de recursos naturales del país andino y la pobreza acuciante de la mayoría de sus habitantes. La amenaza de Castillo de nacionalizar el gas y las multinacionales mineras (si se negaban a negociar nuevos contratos más favorables al país) conectó con las aspiraciones del pueblo pobre.

Su promesa de una asamblea constituyente, de mantener su sueldo de maestro y limitar los sueldos de los altos cargos, conectó con el rechazo a la corrupción capitalista que ha dominado la política peruana por décadas y la aspiración de un cambio fundamental.

Estos comicios mostraron las dos caras del Perú, la pequeño burguesa y burguesa de las regiones del Norte y de los barrios de clase media y alta de Lima, y la obrera, campesina y combativa de las regiones sureñas del Perú empobrecido. La campaña electoral estuvo plagada de negociaciones, presiones y calumnias, evocando al recuerdo de la época del terrorismo de Sendero Luminoso. La podrida oligarquía capitalista peruana se unió en una campaña sucia con un solo objetivo: impedir la llegada de Castillo a la presidencia. Utilizó para ello todos los medios a su alcance, la calumnia, la demonización, la campaña anticomunista en vallas publicitarias, las amenazas abiertas y veladas, los grandes medios de comunicación. Aunque esta campaña ciertamente tuvo un impacto, no lograron su objetivo.

Es importante señalar que, durante la campaña de la segunda vuelta, Castillo y su equipo progresivamente fueron moderando su discurso. Se insistía en la renegociación de los contratos con las multinacionales, pero se obvian referencias a su nacionalización. Se insistía una y otra vez en el respeto a la propiedad privada. Se incluyeron a elementos "respetables" de la izquierda reformista, o "gestores reconocidos" en el equipo del candidato presidencial, como por ejemplo el economista Pedro Francke. El objetivo era "tranquilizar a los mercados", "dar confianza a los inversores". En realidad, esta moderación del discurso no convenció a los capitalistas, y al contrario, creaba dudas entre los sectores de obreros y campesinos pobres que apoyaban a Castillo.

Finalmente, después de un mes y medio de que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales del Perú, el lunes 19 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones emitió la tan esperada Acta General de Proclamación de Resulta-



dos de la Elección de Presidente y Vicepresidente de la República, declarando formalmente a Pedro Castillo como ganador y próximo presidente del Perú.

Esta proclamación se da después de un largo y burocrático proceso pues a pesar de que el 15 de junio la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó de contabilizar y procesar las 86,488 actas electorales, donde Pedro Castillo obtuvo el 50.126% y su rival Keiko Fujimori 49.874%, con una diferencia porcentual de 0.252% que representaron 44,263 votos favorables para Castillo, la proclamación no se hizo de inmediato.

¿Por qué tardaron tanto en proclamar a Castillo?

Durante el proceso de conteo, la tendencia iba mostrando que la ventaja de Castillo sería irreversible, por lo que Fujimori y sus abogados presentaron una petición de nulidad de 802 mesas electorales, que representaban 200 mil votos, y un proceso de impugnación de 1,200 actas, que representaban 300 mil votos, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con la intención de eliminar la cantidad suficiente de votos favorables para Castillo y sumarse otros tantos que le pudieran dar la victoria.

Todo este proceso es el que provocó la demora en la promulgación de ganador en la contienda electoral, pues las impugnaciones tuvieron que pasar primero por los jurados electorales especiales donde fueron rechazadas, pero ante las apelaciones presentadas por los abogados de Fujimori, estas tuvieron que ser revisadas por el JNE, instancia que rechazó las impugnaciones presentadas. Este proceso ya se ha dado por concluido y la constancia ha sido entregada al presidente y vicepresidenta electos quienes tomaron posesión el 28 de julio.

Desde la mañana cuando el JNE anunció que rechazaría las últimas apelaciones presentadas por el equipo de Fujimori, la candidata declaró que aceptaba su derrota, sin embargo, también mencionó que Castillo ganó de manera ilegítima y fraudulenta (cuestión que no pudo demostrar), por lo tanto, haría llamados al “pueblo” peruano a movilizarse contra la supuesta imposición de Pedro Castillo.

Una cuestión clara que pudimos observar de este proceso electoral es que definitivamente cuando Keiko Fujimori habla del pueblo, se refiere a los grandes empresarios, latifundistas, oligarcas y pequeños burgueses quienes conforman su base de apoyo sobre todo en Lima y en algunas regiones del norte donde se concentran los sectores privilegiados de la sociedad peruana. Por el contrario el pueblo que votó por Pedro Castillo es diametralmente diferente, pues se trató de los sectores más empobrecidos, oprimidos y explotados del Perú, donde la usual tendencia anti sistema de los departamentos del sur, mostraron su fuerza apoyando a Castillo con ilusiones de que él represente este proceso necesario para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, las mujeres, la juventud, los indígenas y todos los sectores que diario son sometidos a la discriminación y la miseria.

Es claro también que este proceso dilatorio en la proclamación fue utilizado, por una parte, por Fujimori para evitar la cárcel, por otra parte, por sectores de la burguesía peruana para presionar a Castillo y negociar que ablande aún más su programa, o simplemente como una medida para medir la fuerza del movimiento popular que respalda a Castillo y las fuerzas de la reacción.

En este sentido pudimos ver representada la fuerza de la burguesía a través del Estado y sus instituciones, y la fuerza de la clase obrera y los oprimidos en las calles organizándose contra un posible fraude y exigiendo la proclamación.

Desde un punto de vista reformista, se dirá que la proclamación de Pedro Castillo como presidente del Perú es un triunfo de la democracia y un reflejo de la efectividad y honestidad de las instituciones burguesas, con quienes hay que continuar

trabajando, proponiendo reformas y modificaciones a la constitución que mejorarán las condiciones de vida de los ciudadanos, apelando al cumplimiento del estado de derecho. Sin embargo, desde un punto de vista marxista podemos decir que claramente no es así, si estas instituciones lacayas

del poder económico de los oligarcas peruanos y de los imperialistas han tomado la decisión de nombrar a Castillo presidente no es porque sean muy honestas y democráticas, sino porque temían que, de no haberlo hecho, se hubiera desatado un proceso de lucha, que, dadas las condiciones de precariedad, crisis económica y sanitaria, no se sabe hasta dónde podrían parar o si tendrían la capacidad para frenarlo.

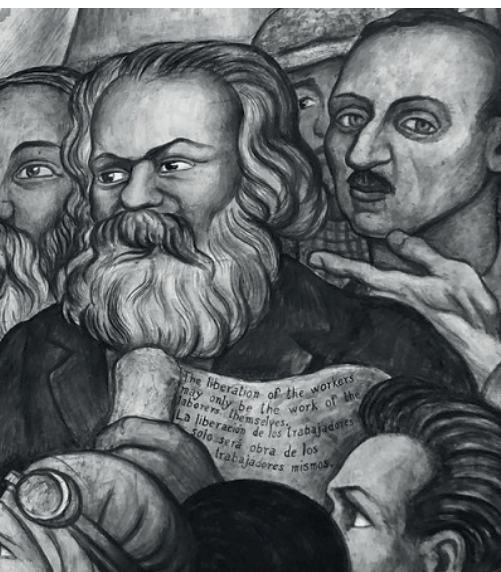
Todo este proceso dilatorio finalmente terminó con la proclamación de Pedro Castillo a pesar de las disputas entre las cúpulas de la burguesía, pero un factor decisivo en esta ecuación fueron las movilizaciones y protestas y el temor de la clase capitalista a que estas fueran a más. Ante la posibilidad de un fraude electoral o un plan golpista de la derecha, se formó el Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, el cual está integrado por las principales centrales sindicales y campesinas del Perú como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Sindicato de Directores del Perú (SINDEP), la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación (FENATE), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Nativas y Asala-



riadas del Perú (FEMUCARINAP), la Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC), la Confederación Nacional de Rondas Campesinas y Nativas del Perú (CONARC), entre otras, de igual forma se unió el partido Perú Libre, Juntos por el Perú, Partido Comunista Peruano, Movimiento Nuevo Perú, Frente Amplio, Partido Runa y Etnocaceristas, todos bajo una consigna clara: ¡Si no hay proclamación, Paro Nacional! Estas centrales tienen una base de apoyo importante en todo el país, por lo que un llamado serio a movilizar sus bases podría abrir el camino de la lucha de clases.

A pocas semanas del nombramiento de Castillo iniciaron las pugnas por la designación del gabinete y las negociaciones para conseguir el voto de confianza del Congreso, en el que Perú Libre no cuenta con una mayoría, para poder ejercer plenamente sus facultades, el cual consiguió. Esta fue una nueva

oportunidad de la clase dominante para ejercer presión sobre Castillo y forzar gestos de moderación. Si bien no pudieron impedir su elección, ahora se preparan para sabotear su acción de gobierno, sobre todo impedir la aplicación de los elementos más radicales de su programa o aquellos que puedan abrir



las compuertas para la irrupción de las masas en la escena.

Durante este proceso vimos una clara tendencia de conciliación de clases. El programa presentado por Castillo es un programa reformista que plantea una “economía popular con mercados”, es decir dejará intactas las estructuras políticas y económicas que sostienen al sistema capitalista, lo cual dejó claro en un discurso que dio a finales de junio: “No somos chavistas, no somos comunistas, no le vamos a quitar sus propiedades a nadie, es totalmente falso lo que se ha dicho, eso está sellado: somos democráticos, respetamos la gobernabilidad y la institucionalidad peruana”. Otra muestra de esta cuestión son elementos claves en su gabinete, como Pedro Francke Ministro de Economía y Finanzas, quien goza de respeto y confiabilidad del sector empresarial del Perú. Durante las discusiones sobre la composición del gabinete Francke amenazó con no aceptar el cargo si se mantenía como Primer Ministro a Guido Bellido quien se asume como marxista, castrista y es representante del ala más radical de Perú Libre. Finalmente se llegó a un compromiso, sobre la base de la moderación del Primer Ministro, cuya capitulación se reflejó en un Twitter donde

indicó: “Pedro Francke tiene todo nuestro respaldo para la aplicación de la política económica de estabilidad”. (<https://twitter.com/GuidoPuka/status/1421270008135622663?s=19>). Este tipo de enfrentamientos se van a repetir inevitablemente en la medida en que el programa de reformas de Castillo choque con la realidad del capitalismo peruano en crisis.

Pero a que se refieren con esta política económica de estabilidad, ¿estabilidad para quiénes? En una entrevista para la BBC Mundo, Francke explica sobre la economía popular con mercados que: “es un modelo de libre actuación de la empresa privada, como lo hemos tenido hasta ahora, pero con un mayor componente redistributivo de parte del Estado” y añade “Hay que redistribuir la riqueza, en particular la riqueza minera”. Con esto se pretende que el nuevo gobierno pueda “redistribuir” la riqueza, disminuir las ganancias de los ricos e invertir en el sector público y que estas inversiones puedan traducirse en una mejora de los servicios de salud y educación, en mejoras en la calidad de vida de los sectores más empobrecidos del país.

En el programa de gobierno de Perú Libre se comenta que este modelo económico está basado en la experiencia de Bolivia y Ecuador. En ambos casos, el gobierno de Evo Morales y el de Rafael Correa fueron ejemplos clásicos de “gobiernos progresistas” latinoamericanos que llegaron al poder como subproducto de una oleada revolucionaria y que durante un periodo pudieron otorgar concesiones a la clase obrera a partir de un ciclo de altos precios de las materias primas. En la medida que el ciclo llegó a su final, hacia 2014, estos gobiernos empezaron a hacer cada vez concesiones más profundas a la clase dominante y al imperialismo a costa de los intereses de los trabajadores y campesinos. Esas políticas de contrarreformas minaron la base de apoyo social a estos gobiernos y llevaron finalmente al golpe de estado contra Evo Morales y el giro a la derecha de las políticas económicas de Lenin Moreno en el Ecuador que desataron grandes movilizaciones en 2019.

Una y otra vez los gobiernos reformistas han demostrado que no puede existir una conciliación entre clases antagónicas y que mientras el poder económico permanezca en manos de la clase burguesa, el pueblo obrero será quien tenga que cargar sobre sus hombros con las penurias de la crisis capitalista. La situación económica a la que se enfrenta el gobierno de Pedro Castillo es diametralmente opuesta a la de los inicios de las olas progresistas latinoamericanas. En lugar de un ciclo alcista de las materias primas, Perú se encuentra inmerso en una profunda crisis capitalista y, la economía china que en su momento tiró de los países del Pacífico, ahora está en franca desaceleración. No hay margen para concesiones. Hasta la reforma más pequeña será peleada con uñas y dientes por la oligarquía peruana quienes, además, tienen una representación mayoritaria en el congreso.

Otros ejemplos de elementos conciliatorios dentro de su gabinete es la designación de Julio Velarde como presidente del directorio del Banco Central para que continúe dirigiendo



esta institución como lo ha hecho durante los últimos 15 años y la renuncia del Ministro de Relaciones Exteriores Héctor Béjar, quien denunció que el periodo del terrorismo en el Perú fue iniciado por la Marina. Ante estas declaraciones, las fuerzas armadas y los sectores de derecha se unieron en protestas hasta forzar la renuncia de Béjar, quien fue reemplazado por Óscar Maúrtua, personaje que no tiene vínculos con la izquierda. La renuncia de Béjar es otra advertencia de hasta dónde está preparada a llegar la clase dominante en el chantaje al gobierno, pero también de la debilidad de Castillo que en lugar de enfrentarse a las fuerzas armadas les entregó la cabeza de su canciller. De esta manera podemos ver como los ministerios más importantes, economía, relaciones exteriores y la banca, quedaron en manos de políticos moderados y afines al sector empresarial, y la maleabilidad del gobierno ante las demandas de los sectores más reaccionarios del estado burgués.

Los trabajadores del Perú se enfrentan a diario a una realidad brutal, pues actualmente es el país con la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo, debido a la pandemia, alrededor de 500 muertos por cada 100 mil habitantes, hasta mayo de 2021 más de 180 mil personas han muerto a causa del virus, a pesar de que desde el inicio se decretó un confinamiento estricto, este no pudo llevarse a cabo tomando en cuenta que más del 70% de los trabajadores del país dependen del trabajo informal, tres de cada diez personas viven en condiciones de pobreza y el 11.8% de las familias pobres viven en condiciones de hacinamiento, lo que pone a los trabajadores en el dilema de arriesgarse a contagiarse de COVID o morir de hambre. Sumado a estas condiciones se tiene un sistema de salud deficiente, sin insumos e incapaz de atender la emergencia, resultado de un capitalismo atrasado y dependiente, de una burguesía incapaz de poder jugar un papel progresista, por el contrario, esta vive del presupuesto del estado y la corrupción, además de una explotación brutal a la clase obrera, con el apoyo del Estado burgués.

Pedro Francke anuncia que el nuevo gobierno tendrá una postura de priorizar el aumento de los impuestos a las grandes mineras, de emprender una lucha contra la evasión fiscal a la renta de las grandes empresas, para poder financiar un mayor gasto social en la salud y la educación de los peruanos. Sin embargo, esto que suena tan lógico, no será sencillo de realizar, pues el nuevo gobierno tendrá que enfrentarse a los intereses económicos del gran capital y del imperialismo. Desde el punto de vista de las multinacionales y de los grandes capitalistas peruanos, esto es algo intolerable. No están dispuestos a pagar mayores impuestos para financiar la salud y la educación de los pobres. Aunque estas medidas sean

muy tímidas, serán resistidas por la clase dominante, que temen que su aplicación abra el apetito de las masas por medidas más radicales.

Para resolver los problemas acuciantes que enfrentan las masas obreras y campesinas no basta con pedir por favor a los capitalistas y las multinacionales que paguen impuestos, sino que hay que poner sobre la mesa el tema de la propiedad de los medios de producción. Los marxistas reivindicamos la necesidad de recuperar las palancas fundamentales de la economía y la gran industria, así como el reparto agrario en el campo, la implementación de planes de infraestructura para beneficiar a los más necesitados (construir escuelas, polideportivos, hospitales, carreteras, etc.)

Marx explicaba en el Manifiesto del Partido Comunista: "La existencia y el predominio de la clase burguesa tienen por condición esencial la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos, la formación e incremento constante del capital; y éste, a su vez, no puede existir sin el trabajo asalariado".

La idea de los reformistas de que se puede redistribuir la riqueza de una manera más equitativa choca con los intereses fundamentales de los capitalistas. En esta época de crisis económica plantear la redistribución de la poca riqueza es utópico, los grandes burgueses tienen algo diferente en mente para conservar casi sin pérdidas sus ganancias y eso es cargar la crisis sobre los trabajadores, incrementar las condiciones de explotación, arrebatar derechos ganados en el pasado.

Para los reformistas, la forma de reparto de la riqueza es convertir al Estado capitalista en un garante de los apoyos sociales, es decir, no romper la dinámica de explotación capitalista sino simplemente dar algo de dinero para que los pobres no mueran de hambre. Esto no resuelve nada. Para los marxistas, de lo que se trata es de la expropiación de las grandes fortunas y de los medios de producción privados, que estos pasen a manos de la clase obrera y el resto de los oprimidos y sean gestionados mediante un plan democrático de producción. Nada tiene que ver una medida con la otra.

Apoyamos cualquier medida seria del gobierno de Castillo que signifique un avance en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Pero advertimos que estas medidas se encontrarán con la resistencia feroz de los capitalistas. Solamente con la movilización audaz de las masas en las calles se puede hacer frente a esa resistencia. Si el gobierno se queda dentro de los límites estrechos del parlamentarismo burgués, y sobre todo sin tener una mayoría legislativa sólida, estará condenado al fracaso. Si se apoya de manera firme en la movilización y la lucha en las calles entonces podrá quebrar la resistencia de la oligarquía. Nuestra lucha no puede terminar ahí, debemos



de emprender una campaña para terminar con el capitalismo, no para limar sus aristas y hacerlo más aceptable.

Para conseguir estos objetivos es necesaria la construcción de un partido revolucionario que pueda rescatar toda nuestra experiencia de luchas pasadas, hacer un balance serio de los aciertos y errores, formar cuadros políticos y tener una estrategia de lucha no sectaria frente al movimiento de masas, que nos permita ir reclutando a los mejores elementos de la juventud, de las mujeres y de la clase obrera para la lucha por el socialismo.

Otro eje central de la campaña de Pedro Castillo también fue la convocatoria de una asamblea constituyente para poder generar un cambio en la constitución fujimorista actual. Gran parte de los que votaron por Castillo creen que la modificación de la constitución traerá cambios significativos en la vida cotidiana de los oprimidos del Perú, y por lo tanto se están organizando en torno a esta reivindicación, en campañas de juntar firmas y reuniones informativas. La gestación de proceso organizativo de los trabajadores es bastante positiva, pues a partir de esta los sectores más avanzados podrán sacar algunas conclusiones revolucionarias. Sin embargo, como marxistas debemos advertir que una modificación de las estructuras de la legalidad burguesa no representará un cambio significativo. Mientras el poder político y económico esté en manos de la clase capitalista, nada sustancial va a cambiar. Debemos estudiar las experiencias recientes de asambleas constituyentes, por ejemplo en el vecino Ecuador. La Asamblea Constituyente que convocó Rafael Correa allá no cambió en absoluto la relación de dominación por parte de la oligarquía y el imperialismo. Más recientemente, en Chile, la Convención Constituyente ha servido para desviar el estallido insurreccional de 2019 hacia canales seguros de parlamentarismo burgués. La Convención Constituyente no ha servido ni para decretar la libertad de los presos políticos de la revuelta y los responsables de la represión siguen impunes. Por más progresistas que sean las leyes, estas requieren del aparato estatal para implementarse y mientras este y las palancas fundamentales de la economía estén en manos de la burguesía, sólo servirán a sus intereses. Nuestro papel en el movimiento debe ser la lucha codo a codo con nuestra clase por conseguir esta y otras reivindicaciones, pero sin compartir las ilusiones, y al mismo tiempo aprovechar cada espacio de organización para explicar pacientemente la necesidad de ir más allá, explicar las limitaciones de los programas reformistas y la importancia de construir el partido revolucionario.

¿Cuál debe ser entonces la actitud de los marxistas ante el gobierno de Pedro Castillo? Es indudable que existen muchas ilusiones y esperanzas de que este gobierno lleve adelante un cambio fundamental en las condicio-

nes de vida de obreros y campesinos. Nuestra tarea es acompañar a nuestra clase, apoyando toda medida progresista que tome el gobierno, pero al mismo tiempo advirtiendo de manera clara que solamente con la lucha organizada de la clase trabajadora y el campesinado pobre, se podrá avanzar.

El gobierno de Castillo se verá sometido a la presión de dos fuerzas mutuamente irreconciliables. Por una parte la presión de las grandes multinacionales y sus agentes en la oligarquía capitalista peruana que quieren mantener a toda costa su poder y privilegios. No van a dudar en presionar, sabotear y chantajear a Castillo si trata de tocar sus intereses. Y lo harán con todos los medios a su alcance: el aparato del estado, su mayoría parlamentaria, el control de los medios de comunicación, la injerencia imperialista, etc. Debemos aprender las lecciones del gobierno de Allende en Chile en 1971-73.

Por otra parte el gobierno de Castillo también estará bajo la presión de las amplias masas obreras y campesinas, del pueblo trabajador y pobre que le ha votado esperando un cambio fundamental en sus condiciones de vida y trabajo. Si Castillo cede ante la oligarquía, perderá su apoyo, minando así la propia base de su gobierno, al que los capitalistas no dudarán en hacer a un lado. Si por el contrario trata de avanzar llamando a la lucha en la calle, tendrá el apoyo de obreros y campesinos en su enfrentamiento con la oligarquía. No se puede contentar a ambos sectores, o con el pueblo trabajador o con la oligarquía y el imperialismo, he aquí el centro de la cuestión.

En este proceso de avance y retroceso, de lucha y traición, la clase trabajadora sacará lecciones. Los marxistas en todo momento debemos acompañar a nuestra clase en este proceso. Explicando claramente las contradicciones centrales y cómo resolverlas. Avanzando dentro del movimiento general de la clase la idea de la organización independiente de la clase obrera y la necesidad de un programa socialista de expropiación de las multinacionales y los capitalistas. De esta manera, con paciencia, empezaremos el proceso de agrupar los cuadros que puedan proporcionar al movimiento de una dirección marxista a la altura de las circunstancias.

Ante todo, es necesario empezar la tarea de la construcción del partido revolucionario y la lucha por el socialismo, pues citando al marxista peruano José Carlos Mariátegui: "La revolución latinoamericana será nada más y nada menos que una etapa, una fase de la revolución mundial. Será simple y puramente la revolución socialista. A esta palabra, agregad, según los casos, todos los adjetivos que queráis: 'antimperialista', 'agrarista', 'nacionalista-revolucionaria'. El socialismo los supone, los antecede, los abarca a todos". ¡Por la emancipación de todos los oprimidos del mundo, organización y lucha de clases!



La crisis política y la lucha por la Asamblea Constituyente en el Perú

Karen Campos y Jorge Martín

Durante los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo, se han hecho evidentes sus constantes concesiones ante la derecha oligárquica, que entre más cede Castillo más se intensifican los ataques hacia él.

Esta situación generó un lógico proceso de descontento y decepción entre las bases que apoyaron su proyecto de gobierno, pues con tal de conciliar con la burguesía parasitaria parecía haber olvidado que fue su programa y sus promesas de campaña que fueron los que lo llevaron a la presidencia y no su persona en sí.

Con cada cambio de premier, se iba diluyendo el tibio programa presentado por Castillo, alejando a figuras que parecían más radicales o más a la izquierda, sustituyéndolos por personas “más estables”, o más afines, a los intereses de la clase dominante peruana y las multinacionales.

Así fue como esta política titubeante sumada a la crisis económica a nivel mundial, desató las manifestaciones del mes pasado, contra la carestía de la vida, pues los precios de los combustibles y de la canasta básica han aumentado considerablemente, provocando que las familias más pobres de la clase obrera sean incapaces de adquirir lo necesario para sobrevivir.

Un gobierno reformista y conciliador, inevitablemente se encontrará, en todo momento, ante la disyuntiva de los intereses de clase. No es posible gobernar tanto para unos como para los otros, pues dentro del marco económico, político y social del capitalismo, otorgar derechos a la clase obrera significa atacar los intereses de la clase burguesa, y mantener los beneficios de la clase burguesa significa atacar y arrebatar derechos a la clase obrera. Particularmente en un momento de crisis del capitalismo, no puede haber medias tintas, o se está de un lado o del otro.

Después de meses de concesiones a la oligarquía y retrocesos, el 22 de abril el presidente Castillo anunció desde Cuzco que presentaría un proyecto de ley para preguntar a la ciudadanía si quieren o no una nueva constitución. Era un intento claro por reconectar con las masas que lo llevaron al poder bajo la promesa de campaña de la Asamblea Constituyente.

Este anuncio ha causado revuelo entre las capas más avanzadas del movimiento obrero que ven a la constitu-

yente como una vía hacia un cambio radical y como una vía de liberación del lastre del fujimorismo. La Constituyente se ha vuelto centro de discusión en los diferentes gremios en lucha del Perú. Incluso, dentro de las protestas de Junín del mes pasado, ya se hacía eco a la demanda de la constituyente. De hecho, ya ha habido llamados desde las centrales sindicales a realizar Paros Nacionales, por demandas económicas, donde la consigna: ¡Nueva Constitución! se ha hecho presente. Ante la profundización de la crisis económica, esta demanda podría ser la que aglutine el movimiento obrero del Perú.

El proyecto de ley presentado por Castillo ante el Congreso planteaba la realización de un referéndum para la convocatoria de una Asamblea Constituyente y que este pueda realizarse durante el proceso electoral regional y municipal que se llevará a cabo en octubre de este año, con la siguiente pregunta: ¿Aprueba usted la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva constitución política?

El referéndum constituyente archivado

Lo irónico de esta situación, es que la constitución fujimorista actual debe ser reformada para dar cabida a la posibilidad de generar una nueva constitución. Y quienes deben aprobar esta reforma, son exactamente los mismos que se oponen a ella. Así, el 7 de mayo, la Comisión de Constitución del congreso votó por mayoría archivar la propuesta del presidente. Los representantes de todos los partidos de la derecha votaron en contra de que sea el pueblo el que decida si quiere o no una constituyente. Se llenan la boca de democracia, pero no quieren dar la voz a la mayoría. Ahí se demuestra el auténtico carácter de la oligarquía peruana que teme que el pueblo se pronuncie.

Podemos ver de forma más clara el verdadero carácter del Estado burgués, cuyo aparato está diseñado para defender bajo argumentos jurídicos y legales los intereses de la clase dominante. Ante esta situación, tanto Castillo como su gabinete han dado muestras de vacilación. Por un lado declaran que “no hay un plan B” y por lo tanto abandonan la lucha por la constituyente, mientras que por el otro algunos hacen declaraciones del tipo que “la palabra del pueblo es sagrada” y que de este depende que haya un referéndum.

Además de eso, en mitad de ese proceso, la bancada de Perú Libre se prestó a una maniobra para elegir a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, de mayoría conservadora y fujimorista. La votación en el Congreso sobre la elección de los magistrados, el 10 de mayo, fue sin debate y en la misma se produjo una alianza contra natura de Perú Libre con el fujimorismo. Esto llevó a la ruptura de la bancada parlamentaria de Perú Libre, con la salida del Bloque Magisterial y fue además una fuente de desprestigio para el sector afín a Cerrón.



El problema desde el punto de vista de la clase dominante es que al bloquear la vía parlamentaria para el referéndum sobre la Constituyente, no deja más camino que el de la movilización de masas en las calles para conseguirlo, creando así un foco en el que se pueden concentrar todas las luchas. Ya la Asamblea Nacional de los Pueblos, que agrupa organizaciones obreras, campesinas y populares y sesionó el 14 de mayo, llamó a un Paro Nacional y Jornada de Lucha para el 27 y 28 de junio. Éste es el camino.

A esta Asamblea asistió también Castillo, que se enfrenta a un nuevo intento de vacancia presidencial por parte del ultraderechista Renovación Popular y en el momento más bajo de aprobación desde su elección hace 9 meses. En un intento por volver a conectar con las masas pobres, obreras y campesinas, que le auparon a la presidencia, Castillo dijo que “la voluntad del pueblo no se puede amordazar” y volvió a defender la necesidad de una constituyente”.

Es claro que, en el Perú, la Asamblea Constituyente no se dará sola, ni por la voluntad del congreso, sólo mediante la lucha organizada del pueblo trabajador del campo y la ciudad se podrá presionar para arrancar de la burguesía la demanda popular.

Una Constituyente ¿para qué?

La lucha por la Asamblea Constituyente no es una cuestión abstracta. En primer lugar, es una cuestión democrática básica. La Constitución actual que rige en Perú es la de 1993, redactada bajo la dictadura de Fujimori, con apenas algunas enmiendas menores. Mandar esa Constitución al cubo de basura de la historia representa cortar de raíz con la dictadura. En segundo lugar, para cientos de miles de obreros, campesinos y jóvenes, la idea de una Asamblea Constituyente aparece como la vía para romper con las desacreditadas instituciones políticas burguesas existentes, la misma aspiración que llevó al levantamiento de noviembre de 2020 y a la elección de Castillo el año pasado. La consigna de “cierre del congreso y nueva constitución” resume este profundo rechazo. Y en tercer lugar, la consigna de la Constituyente es vista como la vía para cambiar decisivamente las condiciones de vida de la mayoría, y aplicar las medidas del programa electoral de Castillo, incluyendo la reforma agraria, la nacionalización del gas y de las multinacionales mineras.

La experiencia de Chile

Ante estas expectativas, es importante analizar la experiencia de Chile, donde está sesionando actualmente una Convención Constituyente.

Desde el 18 de octubre hasta finales de noviembre de 2019 se desarrolló un levantamiento de masas de carácter insurreccional, donde participaron entre 5 y 6 millones de

personas. Fue una titánica protesta contra el régimen del capitalismo chileno, donde las masas obreras pusieron a prueba su fortaleza. Es innegable el valor y la determinación que mostró la clase obrera en la lucha, con la juventud a la vanguardia. Sin embargo, esto no lo es todo, se requiere de una dirección que pueda enfocar la fuerza del movimiento obrero hacia un cambio revolucionario.

En este proceso de lucha, la implementación de una Asamblea Constituyente representaba para el movimiento una aspiración por un cambio social, así como la representación de su repudio hacia el régimen actual.

Pero, una Asamblea Constituyente no es más que un parlamento democrático burgués, por lo tanto, se trata de una demanda democrático-burguesa, sin embargo, esto no significa que bajo determinadas circunstancias sea correcto que la clase obrera luche por conseguirlos, pues la conquista de estas demandas serán una escuela para sacar lecciones más avanzadas en la lucha de clases.



En el caso de Chile, el régimen se apropió de la idea de la Constituyente para sacar a las masas de las calles, donde amenazaban con barrer con todo el edificio de la democracia burguesa podrida, hacia los canales más seguros del parlamentarismo, en este caso bajo la forma de una Convención Constituyente. Cuando las masas en las calles exigían el “Fuera Piñera”, todos los partidos parlamentarios (con la excepción del Partido Comunista) firmaron el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, que terminaría por desmovilizar a las masas, empantanado la lucha bajo el proceso de una constituyente que no irá más allá de los límites del parlamentarismo burgués, un cambio para no cambiar.

En Chile, se tenían las condiciones para avanzar hacia una insurrección en la que las masas de la clase trabajadora tomaran el poder en sus propias manos. Lo único que faltaba era una dirección revolucionaria a la altura de las circunstancias capaz de convencer a las masas de que sólo mediante sus propias fuerzas y arrebatándole el poder político y económico a los dueños del capital podremos solucionar de raíz todos los problemas que aquejan a nuestra clase.



Así, la Convención Constituyente chilena se ha convertido en la práctica en un foro de discusión que no resuelve ninguno de los problemas fundamentales de trabajo, vivienda, salud, educación, a los que se enfrentan las masas. Es importante sacar lecciones.

Cambiar el mundo de base significa expropiar a los capitalistas y las multinacionales

Debemos advertir, sin embargo, que un cambio del texto de la Constitución, en sí mismo, no resuelve los problemas centrales a los que se enfrenta la clase obrera y los pobres en el Perú. Para que no haya nunca más pobres en un país rico, lo que es necesario es expropiar la riqueza que está en manos de un puñado de empresarios en la CONFIEP y las multinacionales mineras y otras a las que están estrechamente vinculadas y ponerlas en manos de la clase trabajadora para satisfacer las necesidades de la mayoría de la población y no de una minoría de parásitos.

Es indispensable unir las reivindicaciones democráticas con las reivindicaciones sociales y económicas. Hay que entender que de lo que se trata es de barrer con el capitalismo peruano de raíz, no de tratar de hacerlo funcionar en beneficio de la mayoría. Lamentablemente, Cerrón y Perú Libre siguen aferrados a la idea de una "economía popular con mercados". En realidad esto no es más que un eufemismo del capitalismo.

Vladimir Cerrón ha tratado de convencer a los "empresarios nacionales" "con cultura y sentido de patria" que ellos serían "uno de los principales beneficiarios" de una nueva constitución, que les protegería de "las transnacio-



nales". El problema es que la burguesía peruana ya ha declarado abiertamente, en palabras y hechos, de qué lado está: del lado del imperialismo y las multinacionales a los que están atados por miles de hilos económicos, personales y políticos.

En la época del imperialismo, la burguesía nacional, en un país dominado, no puede jugar ningún papel independiente. Esto ya lo explicó el Amauta Mariátegui hace casi cien años cuando insistía, contra el APRA, que la revolución que necesita el Perú no puede ser solo "antimperialista", sino que debe ser anticapitalista, y por lo tanto, socialista y parte de la revolución socialista internacional.

La clase trabajadora debe de tomar todo el poder en sus manos, político y económico. Solo así podremos barrer de una vez y para siempre la memoria sangrienta de la dictadura del capital en el Perú.

América Socialista - En Defensa del Marxismo

Revista teórica de la Corriente Marxista Internacional

Adquiérela a sólo 6 S/.
más gastos de envío

